

DEMÓCRATAS PERO VIOLENTOS: UNA APROXIMACIÓN A LAS VARIABLES ESTRUCTURALES PARA ENTENDER LA INSEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA

*Democrats but violent: a preliminary approach
to the structural variables to understand
the insecurity in Latin America*

Juan Mario Solís Delgadillo
Vicente Torre Delgadillo

Resumen

En los últimos años América Latina ha experimentado como nunca antes la expansión de la violencia. De acuerdo con muchos estudios, este fenómeno está estrechamente vinculado a la desigualdad y se manifiesta de muy diversas maneras. Esto quiere decir, que la violencia en América Latina no tiene un patrón único de comportamiento. En la presente investigación se busca realizar un acercamiento problema de manera descriptiva y explorar cuáles pudieran ser las causas de la inseguridad en la región con base en variables e indicadores institucionales y socioeconómicos. De acuerdo con esto, se considera que factores como la debilidad institucional, la corrupción, la desigualdad y el capital social inciden de una u otra manera, o al menos en grados diferentes, a la hora de explicar por qué el sub-continente latinoamericano es una región tan violenta siendo a la vez un territorio en paz.

Palabras clave: Inseguridad, Estado de Derecho, crimen organizado, desigualdad.

Abstract

Over the last years Latin America has experienced as never before the expansion of violence. According to many studies, this phenomenon is closely linked to inequality and manifests itself in many different ways. This means that violence in Latin America does not have a unique pattern of behavior. The goal of the present investigation is to seek a descriptive approach to the problem and to explore what might be the causes of insecurity in the region based on institutional and socio-economic variables and indicators. Accordingly, it is considered that factors such as institutional weakness, corruption, inequality and social capital influence in one way or another, or at least in different degrees, when explaining why the Latin American sub-continent is such a violent region while being a territory in peace.

Keywords: insecurity, rule of law, organized crime, inequality.

América Latina es una región democrática pero violenta, y las causas que producen la inseguridad ni son tan claras ni tan evidentes como muchos tomadores de decisiones y “opinadores” en general afirman. Es decir, que en torno al tema de la violencia y la inseguridad en la región existen muchos más mitos que evidencias, así como la formulación de preguntas incorrectas y argumentos fuera de lugar. Algunos de esos mitos convencionales que se han creado alrededor del tema no dudan en asegurar que la violencia es un producto de la pobreza, o bien que es resultado de la escasa educación y cultura de los países que la padecen, o en cualquier caso, es el criterio geográfico el que explica dicha situación.

Con base en lo anterior, en muchos países de América Latina ha cuajado la idea de que a la violencia se le combate con más violencia, y que las manos duras son necesarias para extirpar el mal que se ha insertado en la sociedad. Este argumento (mal elaborado, y poco democrático) ha justificado una andanada de violencia desde el Estado y ha dado sentido a una especie de “solución final” que antes de dar buenos resultados ha sido a todas luces desastrosa. Lo hasta aquí descrito deja de manifiesto cómo en América Latina han logrado pervivir algunos rasgos autoritarios (como el terror, la imposición, la exclusión, la represión, la intolerancia, la arbitrariedad, etc.) que apelan a la manifestación de la fuerza como el antídoto para combatir y derrotar al enemigo, cualquiera que éste sea. Para quienes apoyan estas medidas, el fin justifica los medios incluso si éstos implican violar o suspender derechos plenamente reconocidos.

Al contrario de las ideas ya descritas, el argumento central de este trabajo se centra en problematizar cuáles son las causas de la inseguridad en América Latina con base en variables e indicadores institucionales y socioeconómicos. Se estima que son las instituciones (políticas, sociales, económicas, jurídicas, judiciales, etc.) vistas desde su estabilidad y su capacidad para constreñir conductas, las que producen incentivos y efectos diversos que favorecen o no el cumplimiento del Estado de Derecho. De acuerdo con esto, se considera que factores como la debilidad institucional, la corrupción, la desigualdad y el capital social inciden de una u otra manera, o al menos en grados diferentes, a la hora de explicar por qué el sub-continente latinoamericano es una región tan violenta siendo a la vez un territorio en paz.

Lo que aquí se muestra es un análisis exploratorio, y en cierta medida descriptivo. Lo que a continuación se expone ofrece algunas pautas tanto del estado de la cuestión así como algunas aproximaciones que permitan ir conociendo este fenómeno complejo y muy actual para la región. De la misma manera, este trabajo sirve para exponer las dificultades y vicisitudes que el equipo de trabajo ha encontrado a la hora de buscar datos, dada la asimétrica sistematización de la información oficial disponible que ofrecen los gobiernos de la región.

Dicho lo anterior, el presente trabajo se divide en cuatro partes: en la primera de ellas, se describe el estado actual de la violencia e inseguridad en América Latina con base en los reportes de organismos internacionales, así como a partir de los estudios realizados

por otras instituciones no oficiales y académicos; en segundo lugar se presenta la propuesta metodológica para el estudio de violencia e inseguridad en la región poniendo énfasis en las variables y sus indicadores; en un tercer momento se expone de manera breve los primeros hallazgos descriptivos que el equipo de investigación ha encontrado a partir de la recolección de datos de los indicadores de algunas variables independientes; por último, se plantea una serie de comentarios finales a manera de hoja de ruta con los pasos a seguir de cara a profundizar el trabajo.

ESTADO ACTUAL DE LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

Por razones diversas, América Latina ha sido una región muy vinculada a la violencia. Cuando no ha sido la violencia política ha sido la violencia delictiva común la que ha ensombrecido a estos países, y de manera más reciente, la ejercida por el crimen organizado nacional y transnacional. Esta última faceta es precisamente la que en la actualidad se ha convertido en el mayor desafío para los Estados de la región, que en algunos casos han sido cooptados por estructuras criminales capaces de chantajear a actores políticos y económicos legales para conseguir sus fines (Mathieu y Niño, 2011).

Con base en esto, no es de extrañar que la principal preocupación de los ciudadanos latinoamericanos sea la inseguridad, incluso por encima del desempleo.¹ Los ciudadanos, en ese sentido, se sienten amenazados y acosados por la delincuencia, en especial por sus expresiones más violentas como lo son el homicidio, el secuestro, la violencia doméstica y los asaltos (Frühling, 2012; Mejía, 2011). De acuerdo con datos del Barómetro de las Américas 2012 (LAPOP, 2012) 43,5% de los ciudadanos latinoamericanos se sienten más inseguros que hace cinco años.²

En términos globales, en América Latina se cometen alrededor de 36% de los homicidios dolosos a nivel mundial, algo así como 157 mil, lo que convierte al subcontinente en una región altamente violenta y poderosamente llamativa en la medida que se trata de un territorio en democracia y en paz que apenas representa al 8,5% de la población en el planeta (UNODC, 2013). La cara más visible de la violencia en esta parte del mundo está asociada al narcotráfico, pero está claro que no es la única en cuanto el crimen organizado ha expandido sus fronteras de operación y ha diversificado sus actividades criminales en áreas como el tráfico de armas, la trata de personas, migrantes, el contrabando o el robo de vehículos, por mencionar algunas.

Ante este panorama, los Estados han reaccionado de manera distinta y sus resultados han sido variables, pero en todo caso sus intervenciones se han caracterizado por ser insuficientes cuando no contraproducentes. La incidencia delictiva tiene distintos matices, y así mientras en países o regiones como México, Centroamérica o el Caribe predomina

¹ Según datos de Latinobarómetro (2013) en 11 de 18 países estudiados, los ciudadanos manifiestan que el principal problema que afrontan sus respectivas naciones es el relacionado con la delincuencia/seguridad pública.

² La pregunta que se formula a los ciudadanos es la siguiente: Y pensando en su seguridad y la de su familia, ¿Ud. se siente más seguro(a), igual de seguro(a) o menos seguro(a) que hace cinco años?

la violencia con armas de fuego de grueso calibre, en países como los del Cono Sur ésta se relaciona más con artefactos de calibres pequeños o armas blancas. En resumen, mientras el crimen en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe es más letal, en el sur del continente deja a más personas heridas o lisiadas, y no por ello es menos violento (Auyero, Burbano y Bellomi, 2012). Ello encuentra buena parte de su explicación en las rutas del tráfico de armas que son más fluidas en el norte del continente que en el sur.³

LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA

A diferencia de lo que sostienen muchos diseñadores de políticas públicas y tomadores de decisiones, la pobreza no es la variable más consistente para explicar las causas de la violencia. La evidencia empírica demuestra que países como Nicaragua o Bolivia tienen índices bajos de incidencia delictiva, y a su vez se trata de dos de los países más empobrecidos de la región (Mejía, 2011).

Por lo tanto, la pobreza no es ni el único ni el más importante factor para explicar este problema, con lo cual habría que considerar otras variables como la desigualdad para entender las raíces más profundas por las que una persona se siente atraída u obligada a vincularse a la actividad delictiva antes que realizar su vida dentro de los márgenes de la institucionalidad. Algunos indicadores que pueden ayudar a explicar esta relación causa-efecto son, por ejemplo, el reducido o nulo acceso que amplios sectores de la población tienen a la educación, la sanidad, el trabajo, los servicios públicos o la justicia.

En ese sentido, a mayor marginación son mayores los incentivos que puede tener una persona para vincularse en las actividades de la delincuencia común o el crimen organizado. Esto es así, porque como sostienen Mathieu y Niño (2011), mientras más relegada o apartada se encuentre una persona de la sociedad por no tener acceso a bienes y servicios que otras franjas de la población sí disfrutan, las organizaciones criminales llenan esas expectativas y tienen una capacidad de persuasión más efectiva que la del propio Estado. En una región como la latinoamericana en la que además hay miles de jóvenes postergados que ni estudian ni trabajan el crimen organizado es un espacio muy atractivo en donde pueden ganar hasta más dinero que en la economía formal.

DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CRIMINALES

Si bien el narcotráfico es la actividad más visible de la delincuencia organizada es bien sabido que no es la única. En los últimos años se ha evidenciado una propagación en los giros en los que el crimen organizado ha diversificado su presencia y su actividad económica. De esta manera, además del trasiego de estupefacientes, los cárteles se han

³ Basta con echar un vistazo al operativo secreto *Rápido y Furioso* que puso en marcha la DEA al infiltrar más de 1,700 armas desde Estados Unidos a México con el objetivo de rastrear su destino, mismas que tras la confusión de su paradero terminaron siendo identificadas en una buena cantidad de crímenes que acabaron con la vida de muchos mexicanos.

involucrado en otras actividades ilegales como el tráfico de armas, la trata de personas, el traslado de migrantes, la extorsión, el robo de vehículos, e incluso en actividades legales como la hostelería, la minería, la agricultura o el fútbol.⁴

En México y Centroamérica ha sido más evidente esta expansión. En el primer caso, son conocidos los modos de actuación de cárteles como el de Los Zetas a la hora de capturar inmigrantes centroamericanos para forzarlos a trabajar para ellos; el descubrimiento en 2011 de las narcofosas de San Fernando (Tamaulipas) es un claro ejemplo de la brutalidad con que tratan a estas personas, al grado de quitarles la vida con extrema violencia. Asimismo, es conocido el mecanismo que emplean para blanquear dinero a través de negocios en la economía formal que a la postre sirve para seguir financiando sus actividades ilegales; este es el caso concreto de sus negocios vinculados a la hostelería o a la minería.⁵ Por su parte, América Central, se ha convertido no sólo en una zona de tránsito, sino también de almacenaje y distribución de narcóticos, armas, vehículos, autopartes, así como también de personas (Espinoza y Meléndez, 2011).

RUTAS DEL NARCOTRÁFICO

De acuerdo con el *Anuario 2011 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe* existe un escenario variopinto en lo que se refiere a las rutas de la droga en el subcontinente. Siguiendo este documento, México, Centroamérica y el Caribe son considerados los “corredores naturales del tráfico”, pero se señala que Venezuela se ha ido convirtiendo de manera más reciente en otro punto importante para el envío de drogas a Estados Unidos y Europa, mientras que Argentina y Brasil han comenzado a posicionarse como plataformas para el envío de estupefacientes al viejo continente a través de África.

Asimismo, se estima que Brasil se ha ido transformando poco a poco en un mercado de consumo por lo que el tráfico que llega a este país proviene principalmente de los Estados vecinos, y de manera especial de aquellos que conforman la región andina (Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador).

La puesta en marcha de mecanismos de cooperación con Estados Unidos como la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia han propiciado que se diversifiquen las rutas de la droga para llegar al país del norte en la medida que la presión de los estados mexicano

⁴ En cuanto a la incorporación del crimen organizado en el fútbol, es conocido el caso de la desafiliación de la Federación Mexicana de Fútbol de los equipos Mapaches de Nueva Italia (Michoacán) y Mapaches de Zihuatanejo (Guerrero) que militaban en segunda y tercera división respectivamente tras una investigación que vinculó a la empresa Nobaró (propietaria y patrocinadora de ambos clubes) con el cártel La Familia Michoacana en el año 2008 (*El Universal*, 2008). Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/548993.html>

⁵ Por lo que respecta a la incorporación de los cárteles de la droga en otras actividades económicas como la minería basta echar un vistazo a un par de ejemplos. El primero de ellos es el que a principios del año 2014 reveló que la organización criminal denominada Los Caballeros Templarios estaba vinculada a la exportación ilegal de hierro a China a cambio de recibir químicos precursores para la elaboración de metanfetaminas (*Sin Embargo*, 2014). Disponible en: <http://www.sinembargo.mx/15-01-2014/873559>). El segundo es el que vincula al cártel de Los Zetas en la explotación de minas de carbón en el estado de Coahuila (*Sin Embargo*, 2012). Disponible en: <http://www.sinembargo.mx/04-11-2012/419566>).

y colombiano, respectivamente, se ha endurecido. Esto ha traído consigo, además, la deslocalización de muchas actividades de los cárteles que se han refugiado en los países centroamericanos y cuyas estructuras estatales son más débiles y les permiten manio-
brar con mayor libertad, especialmente en lo que se refiere al trasiego de narcóticos. De acuerdo con lo anterior, es posible identificar la actividad del Cártel de Sinaloa en Costa Rica y Nicaragua, el Cártel del Golfo en Honduras o el Cártel de los Zetas en Guatemala (Niño, 2011:XXVI).

En la región del Caribe, al igual que en Centroamérica, la debilidad del Estado es el caldo de cultivo propicio para que proliferen los cárteles y que éstos tengan incluso un apoyo considerable entre ciertos sectores de la sociedad, y en el Cono Sur latinoamericano se observa que paulatinamente ha ido creciendo tanto el consumo cuanto el tráfico de drogas, situación que hasta hace no muchos años se veía más bien lejana.

En suma, la violencia que azota a América Latina, además de tener proporciones gigantescas tiene orígenes muy diversos, aun y cuando el narcotráfico sea su cara más visible. En cualquier caso, los Estados han demostrado ser incapaces de acotar esta lacra porque muchos de estos grupos criminales se han infiltrado en sus instituciones, porque la ley es débil y porque los delincuentes son capaces de ofrecer a los sectores más vulnerables de la sociedad las oportunidades que el Estado ha sido incapaz de crear para que se desarrollen como personas alejadas del crimen.

Evidentemente son muchas más las causas que generan la violencia, pero la fragilidad institucional y la debilidad de la ley son aspectos a tenerse en cuenta a la hora entender los magros resultados que han obtenido las distintas estrategias emprendidas para combatir este flagelo. La poca cooperación derivada de las diferencias políticas, ideológicas, las desconfianzas tradicionales y los excesivos nacionalismos han sido una de las trabas más importantes de cara a encontrar tácticas comunes para enfrentar al crimen.⁶ La urgencia por brindar resultados inmediatos ha ocasionado no sólo que las estrategias de combate sean deficientes en su diseño, sino que la respuesta criminal sea más violenta.

Una de las causas que con mayor frecuencia repiten los académicos que estudian los motivos de la violencia en América Latina tiene que ver con la debilidad o fragilidad de las instituciones estatales, pero también, y no en menor grado, de la corrupción que prevalece en ellas (Frühling, 2012; Mejía, 2011; Mathieu y Niño, 2011; Niño, 2011; Bergman, 2009; Goodwin 1999; O'Donnell, 1993).

⁶ A reserva de testear información que arroje evidencia empírica plena es posible establecer como hipótesis alternativa al fenómeno de la inseguridad que las diferencias políticas e ideológicas, las desconfianzas históricas y los excesivos nacionalismos que han caracterizado a los Estados latinoamericanos reflejados en principios como el de no intervención terminen siendo un obstáculo para la cooperación internacional frente al crimen organizado.

En todos los casos, los académicos insisten en la idea de fortalecer al Estado para afrontar de manera más eficaz al crimen organizado. Esto implica crear Estados más fuertes que sean capaces de hacer cumplir la ley en todo su territorio; tarea que en la actualidad está claro que no cumplen en la medida que extensas parcelas de sus territorios están bajo el dominio de bandas criminales. Véase por ejemplo el caso de México que ha experimentado en los últimos años una multiplicación de las zonas y rutas bajo control de los cárteles del narcotráfico (Molzahn *et al.*, 2013). En palabras de Mathieu y Niño (2012:XV) “la falta de legitimidad y de capacidad de aplicación de la ley de los Estados [...] los hace profundamente vulnerables a la acción corruptora e intimidatoria del crimen organizado”.

La debilidad institucional se traduce en la incapacidad de los Estados para crear políticas eficaces para combatir a la delincuencia, así como en los bajos niveles de respeto por la legalidad en la medida en que los ciudadanos asimilan que las leyes no se cumplen o que el Estado es incapaz de hacerlas cumplir (Frühling, 2012; Bergman, 2009). Esto afecta directamente a la gobernabilidad porque en cuanto un Estado es incapaz de tener control sobre su territorio y de aplicar la ley se abren espacios para la expansión de la delincuencia (Frühling, 2012).

De acuerdo con el Barómetro de las Américas (LAPOP, 2012), los fallos en el desempeño del gobierno, medidos por victimización por crimen, percepciones de inseguridad, victimización por corrupción y percepción de corrupción, están muy relacionados con el apoyo a las políticas de mano dura en la región (Buchanan *et al.*, 2012). Esto estaría indicando que en aquellos países en donde existe una debilidad estructural del Estado (porque sus políticas de combate al crimen no parten de un buen diagnóstico y no cuentan ni con los recursos ni con la probidad de quienes están a cargo de esta tarea) es más probable que la población exija respuestas inmediatas, aun a costa de sacrificar sus derechos.

Lo anterior está muy relacionado con la baja confianza que los ciudadanos latinoamericanos confieren a las instituciones estatales lo que influye en el aumento en la percepción de inseguridad que manifiestan. A su vez, esta situación perfila claramente que la otra cara del crimen es la corrupción en la medida en que los ciudadanos observan la capacidad corruptora del crimen organizado sobre las instituciones del Estado. En efecto, como sostiene Niño (2011), el crimen organizado tiene una enorme capacidad corruptora que se manifiesta especialmente en aquellos espacios en donde existe una notoria debilidad institucional.

De acuerdo con esta autora, la esencia del crimen organizado es la corrupción, y cuando ésta deja de ser eficiente es cuando estas organizaciones se pueden tornar violentas (Niño, 2011:XXVIII). En ese sentido, la corrupción y la violencia son los factores más decisivos en la erosión de la legitimidad del Estado (Frühling, 2012). En resumen, se puede decir que no es sólo la delincuencia en sí misma la que genera un sentimiento de inseguridad por parte de los ciudadanos, sino que son también las fallas institucionales (corrupción) las que inciden al momento en que los ciudadanos externalan su preferencia por estrategias frontales y de mano dura para combatir al crimen (Buchanan *et al.*, 2012).

Al estar desbordados por la situación, los Estados latinoamericanos han recurrido a estrategias viscerales, poco comprensivas del fenómeno y con diagnósticos mal hechos o equivocados. Es decir, que en aras de dar resultados inmediatos a la ciudadanía, los diseñadores de políticas y los tomadores de decisiones se han guiado más por el sentido común que por el conocimiento preciso (Frühling, 2012: 5).

En esa misma línea no ha resultado extraño un sistemático desprecio a los aportes que la academia ha hecho con evidencia empírica para enfrentar el problema. Por el contrario, el común denominador de las respuestas estatales ha consistido en incrementar las medidas represoras y promover medidas de “populismo punitivo” (Dammert y Salazar, 2009) que consisten en la promesa de poner en práctica medidas de mano dura que castiguen con severidad a los infractores de la ley.

Para ello, muchos gobiernos de la región han echado mano de sus Fuerzas Armadas para que se unan a la lucha contra las bandas criminales sin tomar en cuenta los costos y los efectos que la intervención de los militares puede tener a corto, mediano y largo plazo. El ejemplo quizás más paradigmático de esto es el de México, que tras la denominada *guerra contra el narco* declarada por el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) no sólo balcanizó a la institución militar, sino que sus resultados fueron desastrosos (Molzahn *et al.*, 2013; Hernández, 2012; Martínez Barahona y Rivas, 2011; Hernández, 2010). Otros botones de muestra lo pueden ser Guatemala, Honduras y El Salvador en donde sus políticas de mano dura y súper mano dura han tenido resultados a todas luces negativos (Acevedo, 2008; Martín Álvarez y de la Torre Oropeza, 2008; Briceño-León, 2008).

En términos generales, las estrategias implementadas por los gobiernos latinoamericanos para hacer frente al crimen organizado —quien más, quien menos—, se han basado fundamentalmente en políticas que criminalizan a la pobreza. Siguiendo este hilo conductor, las diferentes estrategias adoptadas en América Latina carecen de objetivos claros y cuantificables; y parten de diagnósticos errados en donde no se identifican grupos específicos y la realidad de sus territorios (Frühling, 2012). Si a ello se suma el constante cambio en el diseño de las instituciones, incluso su reemplazo, es evidente que las políticas, además de resultar incapaces de sostenerse en el tiempo no logran resultados medianamente satisfactorios (Murillo y Levitzky, 2012).

Sin embargo, y a merced de ser justos, es una realidad que hay ciertos aspectos que son positivos y otros más que apuntan, al menos en el papel, hacia una buena dirección. Sobre los primeros, el uso cada vez más frecuente de estadísticas criminales e incluso de encuestas de victimización representa un avance significativo para el diagnóstico y evaluación de las políticas de seguridad; la mayor intervención en áreas con alta incidencia delictiva o proclives a la expansión del crimen habla bien de los enfoques que empiezan a darle a las políticas de seguridad algunos países; el aumento de la vigilancia policial preventiva por cuadrantes como se hace en Chile, Colombia y Ecuador o una mayor compenetración entre las instituciones públicas y la academia no cabe duda que es una buena noticia. Por otro lado, las reformas institucionales, principalmente a los sistemas

de justicia y al funcionamiento de las policías si bien son necesarias y urgentes han tenido resultados variables en algunos casos, y en otros habrá que esperar algún tiempo más para poder hacer las valoraciones pertinentes a su implementación (Frühling, 2012).

Pero quizás la estrategia más recurrida por los gobiernos latinoamericanos, en especial en aquellos países más azotados por la violencia, es aquella de la mano dura (Malone, 2006). De acuerdo con distintos autores, las razones que llevan a un gobierno a adoptar este tipo de estrategia de populismo punitivo pasan por las percepciones de miedo que gran parte de la población manifiesta y a la urgencia de dar resultados, por lo que los gobiernos actúan de manera abierta y punitiva a partir de la presión que sienten y a la necesidad de demostrar su coraje y fortaleza (Buchanan *et al.*, 2012; Goldstein *et al.*, 2007; Smulovitz, 2003).

De esta manera, como sostienen Goldstein *et al.*, (2007) cuando el miedo a la delincuencia es alto aumentan las probabilidades de que la población exija políticas de mano dura.⁷ Esto significa que son sobre todo las personas que han sido víctimas de la delincuencia las que exigen una actuación rápida y contundente por parte de las autoridades traducida en políticas de mano dura. Lo anterior es particularmente notorio en países como El Salvador, Honduras y Guatemala que están cruzados por niveles muy altos de delincuencia, sobre todo de carácter violento.

Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que las políticas de mano dura no dan los resultados que sus impulsores esperan, sino que incluso agravan la espiral de violencia en cuanto se militariza la seguridad interior y se desdibujan los espacios de actuación de las autoridades civiles (Mejía, 2011). A este respecto, es interesante el estudio realizado por Buchanan *et al.*, (2012), a partir de procesar algunos resultados del Barómetro de las Américas (LAPOP) que ponen de manifiesto que a pesar de los niveles de violencia en la región, menos de la mitad de los ciudadanos latinoamericanos están a favor de las políticas de populismo punitivo.

FALLAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA

a) Independencia del Poder Judicial. Sin lugar a dudas, una de las dimensiones más importantes para comprender el fenómeno de la inseguridad en la región tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, para lo cual uno de los indicadores más consistentes es aquel que mide la percepción de independencia del mismo. Con base en la última ola de entrevistas del PELA en 17 países de la región, los legisladores latinoamericanos estiman que el Poder Judicial en su conjunto no es tan independiente como se desearía (5.9/10). Los problemas que atañen a la familia judicial son muchos y todos ellos influyen de alguno u otro modo en el circuito de la inseguridad. A manera de ser claros, las reglas poco transparentes con las que se ingresa o promueve el personal en la

⁷ Este es el caso, por ejemplo, de Paraguay, un país en el que cotidianamente los medios de comunicación dedican buena parte de sus informativos al abordaje de noticias vinculadas con la delincuencia creando de esta manera una sensación de miedo bastante amplio cuando en realidad se trata de un país cuyos niveles de violencia no son tan elevados en comparación con otros países de la región.

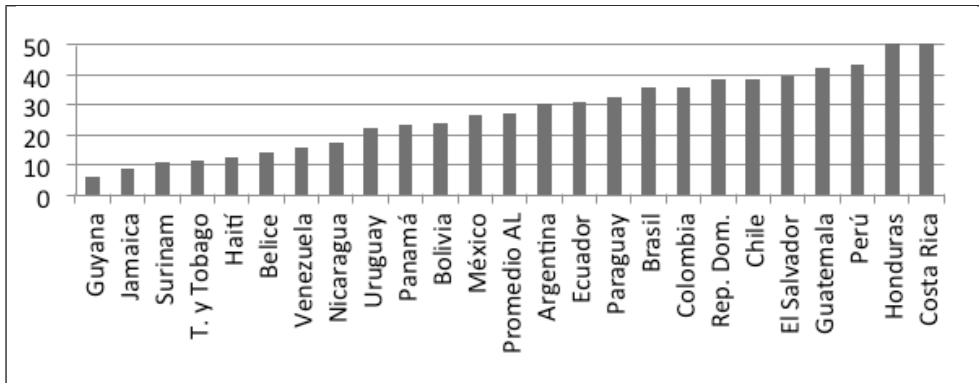


GRÁFICO 1. APOYO A LAS POLÍTICAS DE MANO DURA EN AMÉRICA LATINA (2012)
 Elaboración propia con base en los datos del Barómetro de las Américas (LAPOP, 2012).

carrera judicial es un campo bastante fértil para la corrupción y cooptación del mismo ante intereses de diverso cuño, entre ellos, por supuesto, aquellos del crimen organizado.

Al ser la abogacía una profesión en donde cuentan mucho las relaciones de supra a subordinación, pero también el cúmulo de capital relacional, muchos profesionales ejercen su oficio o litigan en los márgenes de la ley, y ponen a disposición de intereses oscuros o ilegales sus conocimientos (Solís Delgadillo, 2008). Para más de una persona, lo hasta aquí dicho pudiera interpretarse como un contrasentido al derecho que le asiste a toda persona a tener un juicio justo y una representación legal; pero esto no es así. Lo que se quiere poner bajo relieve es que la informalidad que cruza a los sistemas de justicia, desde aquellos que son actitudinales hasta los que implican prácticas tendientes a entorpecer, dilatar e incluso sabotear procesos judiciales implican un serio problema que se traduce en un déficit en cuanto sólo aquellos justiciables con recursos económicos y relacionales pueden alcanzar una justicia a la carta o a su medida. En otras palabras, se pueden extraer dos conclusiones que sostiene Pásara (2004; 2007) tras estudiar ampliamente a los sistemas de justicia de América Latina: *a*) que la justicia en la región se caracteriza por la congestión, dilación y corrupción; y *b*) que con relación a los operadores del sistema de justicia (entiéndase los abogados, sea cual sea su papel y su función) sus problemas de formación se pueden subsanar, pero su falta de ética no tiene solución.

En ese sentido, no debe resultar extraño que para 35% de los latinoamericanos el Estado de Derecho se puede pasar por alto, y por lo tanto, no se reproche que las autoridades actúen al margen de la ley. Bajo este argumento es posible entender por qué un sector importante de la sociedad latinoamericana no ve con malos ojos la restricción de derechos y libertades si a cambio de esto los gobiernos les prometen la seguridad que se ha perdido sin importar las estrategias que empleen en sus cruzadas contra la delincuencia.

Aunado a ello, cuando se pregunta entre los legisladores por el nivel de confianza en las instituciones que se han involucrado en la lucha contra la delincuencia resulta por demás interesante que por lo que respecta al Poder Judicial, en la mayoría de los países se tiende a confiar algo o poco en este poder, mientras que con relación a la policía casi

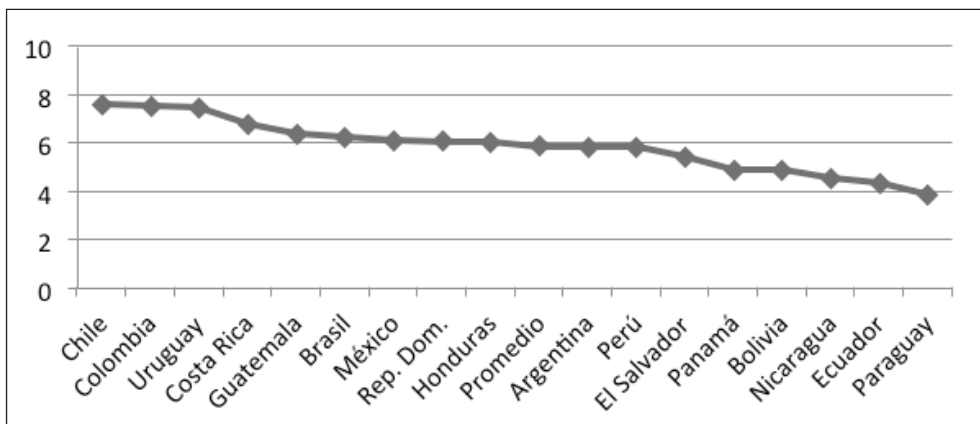


GRÁFICO 2. INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS LEGISLADORES

Elaboración propia con base en los datos del PELA.

todos expresan confiar poco, a excepción de los casos de Chile y Colombia en donde se dice confiar mucho en las fuerzas policiales.

HOMICIDIOS POR CADA 100 MIL HABITANTES

El indicador más duro de la violencia, por lo que se refiere al dato, es precisamente este. Distintos organismos internacionales, pero principalmente la ONU, a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de Drogas y Crimen (UNODC) se han especializado en la medición y estudio de estos fenómenos tratando de poner atención en las causas y los efectos que tienen para cada región en lo general y para cada país en lo particular.

De acuerdo con el *Estudio global sobre homicidios 2013* (Global Study on Homicide 2013) publicado recientemente (UNODC, 2014) las Américas es la región más violenta del mundo con alrededor de 157 mil homicidios dolosos sobre un total de 436 mil contabilizados a nivel global. Además, el estudio revela que el número de víctimas por homicidio en esta región del mundo ha crecido 8.5% entre 2010 y 2012, siendo la sub-región centroamericana una de las más violentas del mundo con una tasa de homicidios superior a los 25 por cada 100 mil habitantes, algo sólo comparable con los registros que se tienen en el sur de África.

Por otro lado, cuando se analizan las franjas etarias de las víctimas por homicidio a nivel global se extrae que la gran mayoría (73%) corresponde a personas entre 15-29 años (43%) y 30-44 años (30%) siendo en América Latina la región más peligrosa del mundo, especialmente en Centroamérica y la región andina en la que, siempre siguiendo al propio informe de UNODC (2014), la tasa de homicidios de personas entre 15 y 29 años es cuatro veces mayor al promedio mundial para ese grupo. De la misma manera, en cuanto al grupo etario de 30-44 años, América Central y el Caribe son las sub-regiones en las que las personas entre estas edades están más en riesgo que cualquiera otras en todo el continente.

TABLA I. CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL Y LA POLICÍA
EN AMÉRICA LATINA SEGÚN LOS LEGISLADORES

		Mucha	Alguna	Poca	Ninguna
Argentina	PJ	15	62.6	22.4	0
	Policía	1.9	28.6	56.4	13.3
Bolivia	PJ	22.2	23.2	28.7	24.9
	Policía	4.2	28.5	42.2	25.1
Brasil	PJ	14.4	60.4	21.7	3.4
	Policía	4.5	46.3	36.2	13.9
Chile	PJ	20.9	62.8	15.1	1.2
	Policía	48.2	42.4	8.2	1.2
Ecuador	PJ	2.2	23	56.1	18.8
	Policía	4.6	29.6	43.5	22.4
Colombia	PJ	31.9	50.2	11.9	2.4
	Policía	49.5	36.4	11.7	1
Costa Rica	PJ	37.5	50	12.5	0
	Policía	3.6	58.9	35.7	1.8
Guatemala	PJ	7.8	57	32	3.3
	Policía	0	13.9	65	21.1
El Salvador	PJ	10.3	32.4	42.6	14.7
	Policía	16.2	48.5	25	8.8
Honduras	PJ	15.4	69.2	15.4	0
	Policía	6.6	51.6	41.8	0
México	PJ	19.1	31.8	38.6	10.5
	Policía	1.6	9.6	57.3	31.5
Nicaragua	PJ	4.3	26.1	47.8	21.7
	Policía	27.5	55.1	17.4	0
Panamá	PJ	14.1	31.1	43.8	3.1
	Policía	9.4	56.3	29.7	4.7
Paraguay	PJ	1.4	2.8	81.9	13.9
	Policía	0	4.2	77.8	18.1
Perú	PJ	6.2	33.7	38.7	19
	Policía	8.5	26.5	52.4	8
República Dominicana	PJ	22.5	61.1	14.8	1.1
	Policía	0	20.5	59.7	19.8
Uruguay	PJ	43.7	52.5	3.8	1.2
	Policía	2.5	77.9	19.6	0

Elaboración propia con base en los datos del PELA.

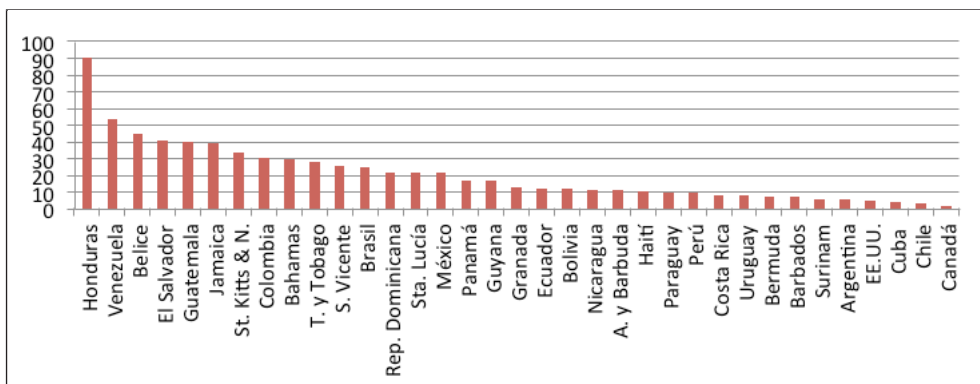


GRÁFICO 3. TASA DE HOMICIDIOS POR CADA 100 MIL HABITANTES EN AMÉRICA LATINA (2012)

Elaboración propia con base en los datos de UNODC, 2014.

Al observar en perspectiva comparada la tendencia de los homicidios cometidos en la región en el año 2012 se puede apreciar que en América Latina hay distintos niveles de violencia con resultado de muerte según la subregión y el lugar que ocupen éstas en las rutas del trasiego de drogas y de armas. De esta manera, es posible apreciar que los países con más incidencia de homicidios son los centroamericanos y caribeños, además de México, Venezuela y Colombia; estos dos últimos que comparten la región andina y que son importantes plataformas para la producción y transporte de drogas para Estados Unidos, Europa, y recientemente la propia América del Sur.

Desprendido del Gráfico anterior es interesante observar cómo es que los países más violentos de la región se encuentran en el denominado Arco Norte del continente y de las rutas más activas del narcotráfico. De la misma manera, y tomando como referencia los datos de 2012, llama la atención que aunque existen algunos cambios en la incidencia de homicidios, Honduras, Venezuela, Belice, El Salvador, Guatemala y Jamaica continúan en los puestos más altos de la tabla. En el caso de Honduras, es sorprendente mirar cómo es que no sólo se mantiene en el primer sitio de la clasificación, sino que además ha acentuado su espiral de violencia al pasar de poco más de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2010 a más de 90 en 2012. Lo mismo se puede decir de Venezuela, que en el breve periodo de dos años incrementó notablemente su tasa de homicidios al pasar de 45 a 53, lo que habla de la pauperización de las condiciones políticas, sociales y económicas que ha venido atravesando este país de unos años a la fecha. Por otro lado, el deslizamiento, a la baja, de los homicidios en El Salvador y Jamaica son una buena noticia, sin embargo, los niveles de éstos siguen siendo muy elevados y no existen garantías claras que esta tendencia continúe así en los próximos años.⁸

⁸ En el caso de El Salvador el descenso de la tasa de homicidios que ha pasado de 65 por cada 100 mil a 41 encuentra su explicación en la frágil tregua que desde 2011 declararon las maras. No obstante, existe mucho escepticismo acerca de la durabilidad de dicha tregua y sobre la capacidad del gobierno salvado-

Por otro lado, es posible apreciar cómo en el resto de la región existe una especie de estabilización en el porcentaje de su tasa de homicidios pero con diferentes niveles. Así, por ejemplo, países como Brasil, República Dominicana, Trinidad y Tobago y México han mantenido constante su tasa de homicidios, sin embargo ésta sigue siendo alta, mientras que Chile, Uruguay y Costa Rica conservan una tasa sostenida, pero baja.

Con este panorama las preguntas que razonablemente se plantean son: ¿cuáles son los motivos que llevan a una persona a matar a otra?, ¿cuáles son los móviles que se emplean con más frecuencia?, ¿todos los crímenes obedecen a una misma tendencia? Como se puede comprender responder estas cuestiones es una tarea difícil tanto por la complejidad de las organizaciones criminales cuanto por la asimétrica disposición y deficiente sistematización de los datos que recogen las agencias oficiales; o bien por la duplicidad de funciones que en esta materia realizan dos o más instituciones en un mismo país cuyas metodologías para recabar y organizar los datos suelen ser diferentes y la información así lo refleja.⁹

A pesar de estos inconvenientes técnicos y metodológicos, en términos generales existe suficiente información para entender y dimensionar las diferentes variantes de homicidios, los principales móviles e incluso el tipo de arma que se emplea para privar de la vida a una persona. Así, tal y como lo reporta UNODC (2014) en su más reciente informe es posible distinguir entre tres tipos de homicidios: *a)* aquellos relacionados con otras actividades criminales; *b)* los interpersonales; y *c)* los socio-políticos.¹⁰ Así, en atención a las preguntas antes formuladas, en América Latina es posible determinar que la mayoría de los asesinatos perpetrados están vinculados con otras actividades criminales y que las armas de fuego son las más utilizadas para consumir estos crímenes. En efecto, la accesibilidad a estas armas a través del mercado negro, sobre todo en el norte y centro del continente, así como en el Caribe guarda una estrecha relación con el mayor número de homicidios en estas sub-regiones que los que se perpetran más hacia el sur.

De acuerdo con la Imagen 1, el uso de armas de fuego en los homicidios es marcadamente mayor en las Américas que en cualquier otra región del mundo en las que el empleo de objetos punzocortantes, contundentes y otros, son más utilizados que aquellas.

reño para conseguir la desmovilización de estas pandillas. Si la tregua en El Salvador ha tenido relativo éxito se debe en buena medida a la estructura jerárquica de las maras y su capacidad de persuasión sobre sus miembros; características que no tienen las pandillas en Honduras en donde los intentos por seguir el ejemplo de sus vecinos salvadoreños no ha dado frutos y la espiral de violencia se ha agudizado.

⁹ De esta manera, por ejemplo, en Brasil, la información sobre homicidios se pueden consultar en dos fuentes: tanto en el Ministerio de Salud cuanto en el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

¹⁰ Se entiende por homicidios relacionados con otras actividades criminales aquellos cometidos por grupos criminales organizados, así como aquellos que se cometen mientras se perpetra otro delito más convencional como el robo. Los homicidios interpersonales son aquellos que se llevan a cabo para resolver un conflicto cuando una relación está bajo tensión y no necesariamente tiene como intención lograr un objetivo secundario. Finalmente, los homicidios socio-políticos son los que se originan en el ámbito público y son cometidos típicamente como instrumentos para promover la agenda política o social. A diferencia del homicidio interpersonal, las víctimas de este tipo de homicidio son a menudo anónimos para sus perpetradores, o al menos la naturaleza de la relación entre ellos no es una consideración en la decisión de matarlos.

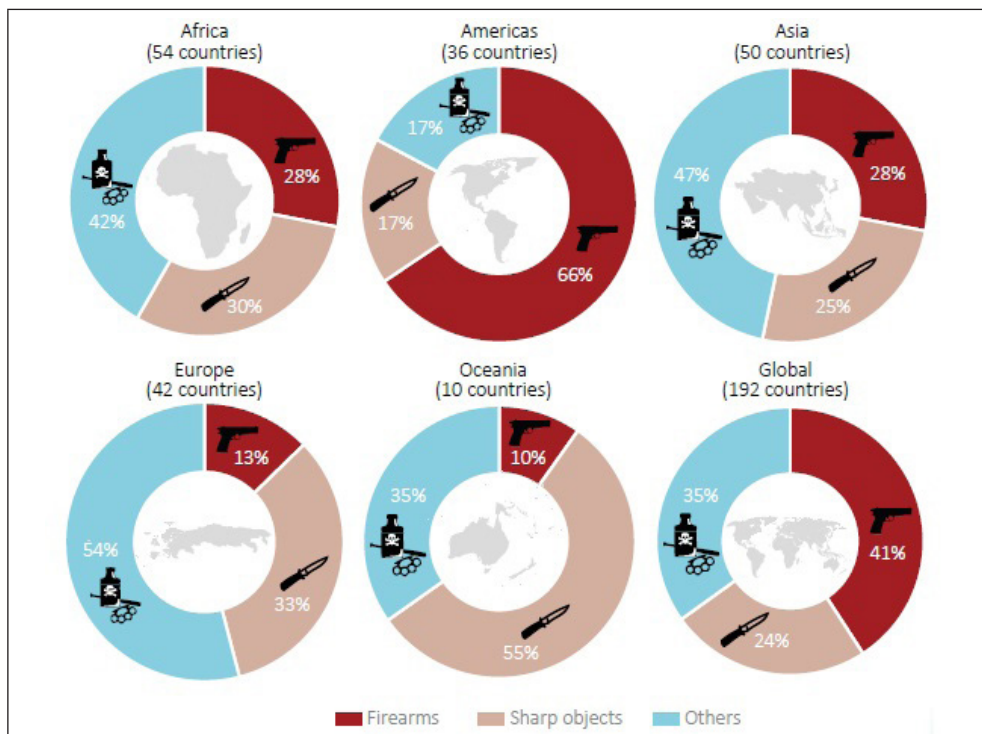


IMAGEN I. TIPO DE ARMAS EMPLEADAS PARA CONSUMIR HOMICIDIOS POR REGIONES
Fuente: UNODC, 2014.

En resumen, tras el breve análisis descriptivo que aquí se ha presentado se pueden asegurar ocho cosas: *a)* que América Latina es la región más violenta del mundo; *b)* que la accesibilidad a las armas de fuego es notoriamente mayor en esta región lo que incrementa la letalidad de las agresiones violentas; *c)* que dicha letalidad es más prevalente en el norte que en el sur del continente donde se encuentran las rutas más activas del narcotráfico (ver Imagen 2); *d)* que la mayoría de los homicidios cometidos en la región están vinculados al crimen organizado; *e)* que este tipo de organizaciones han diversificado su portafolio de negocios lo que ha hecho más complejo rastrear sus espacios de operación tanto en la economía formal cuanto en la informal; *f)* que son la corrupción y la desigualdad, y no la pobreza, dos de los factores clave para entender el fenómeno de la violencia; *g)* que la debilidad de las instituciones ha sido el marco propicio para fraguar políticas de populismo punitivo cuyos resultados distan mucho de ser positivos; y *h)* que, en suma, dos de cada cinco latinoamericanos se siente más inseguro ahora que hace cinco años.

¿CÓMO ABORDAR METODOLÓGICAMENTE EL PROBLEMA?

Como se ha podido observar hasta aquí, el fenómeno de la inseguridad es bastante complejo dado su carácter multidimensional, sin embargo, es posible aproximarse a su com-

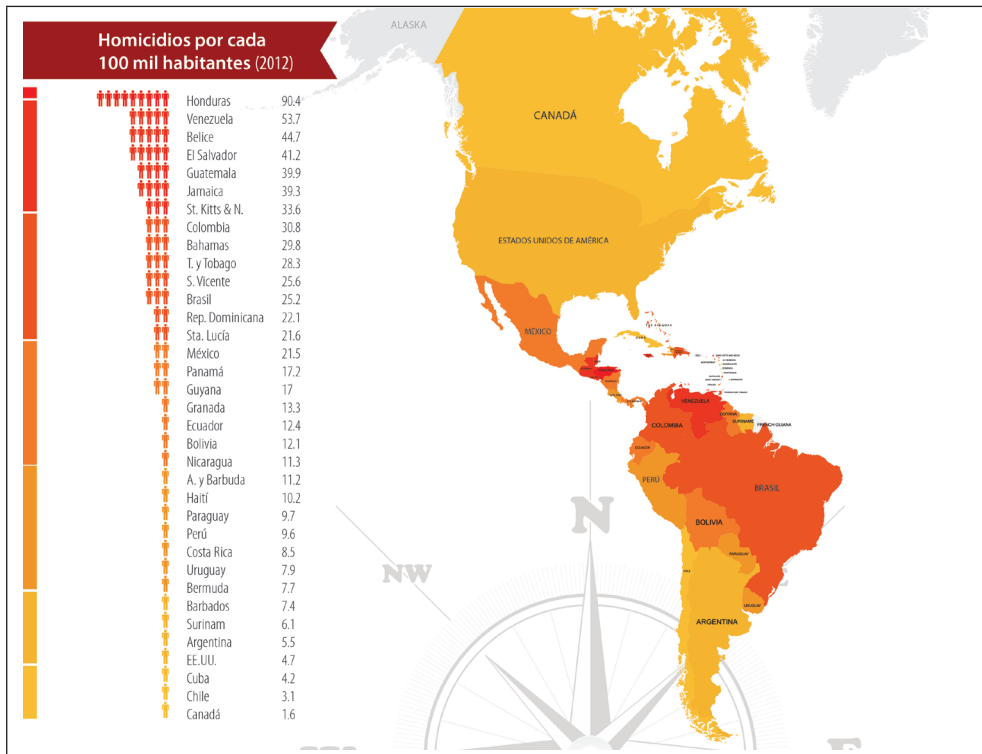


IMAGEN 2. DISPERSIÓN DE LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA POR PAÍS

Esta imagen fue diseñada gráficamente por Alejandro Espericueta (UASLP) con base en los datos de UNODC, 2014.

preensión si se toma en cuenta la basta literatura que sobre el tema ya han escrito otros colegas desde distintos enfoques y disciplinas. Con base en esto, y sin afán de arrojar conclusiones definitivas sobre este tema al que se ha de seguir investigando con más y mejor información, así como con más y mejores instrumentos metodológicos, el propósito que aquí se plantea es aproximarse a la comprensión de este problema a partir de analizar un conjunto de variables estructurales (institucionales y socioeconómicas) que pueden echar luz para abrir camino a la explicación de la inseguridad en la región latinoamericana.

Para tal efecto, se estima que variables como la debilidad de las instituciones, la corrupción, la desigualdad y el bajo capital social pueden tener una relación causal con la inseguridad en virtud de que se trata de factores que son frecuentemente señalados aunque han sido escasamente testeados. De acuerdo con lo anterior, en el Cuadro 2 se desglosan los indicadores y las sub-hipótesis que para cada variable se plantean en la presente investigación.

¿POR DÓNDE EMPEZAR? APUNTES ACLARATORIOS DE UN PROBLEMA A VECES INASIBLE

Lo primero que cabe señalar es que en la recolección de datos el equipo de investigación se ha encontrado con una serie de vicisitudes que han obligado a realizar ajustes en al-

CUADRO I. VARIABLES, INDICADORES Y SUB-HIPÓTESIS
PARA EL ESTUDIO DE LA INSEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA

VARIABLES INDEPENDIENTES	INDICADORES	SUB-HIPÓTESIS
Debilidad institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Presión fiscal • Perfiles de los jefes policiacos 	La escasez de recursos, así como la inestabilidad institucional traducida en cambios constantes en el diseño de las mismas y en el perfil de quiénes están al frente de las fuerzas de seguridad son fallas estructurales que inciden en los niveles de inseguridad.
Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> • Barómetro de la corrupción (TI) • Percepción ciudadana (LAPOP) • Percepción de las élites (PELA) 	A mayor permeabilidad de las instituciones y sus actores a la corrupción, aumentan las probabilidades de que el crimen organizado penetre sus estructuras y asegure su protección.
Desigualdad	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a la salud • Acceso a la educación • Número de empleos creados • Tipo de empleos creados • Brecha salarial por deciles 	El acceso desigual a bienes y servicios como la salud y la educación, así como la insuficiente capacidad de absorción del mercado laboral y sus brechas laborales impactan en amplios sectores de la sociedad que quedan a merced del crimen organizado.
Bajo capital social	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel de confianza de las personas hacia sus vecinos • Promedio de escolaridad 	Mientras más elevado sea el nivel educativo de las personas se reduce la probabilidad de que éstas apoyen políticas de populismo punitivo.

Elaboración propia.

gunos ítems del proyecto sin que éstos perjudiquen o se alejen de los objetivos trazados. Por poner un ejemplo, mientras en un principio se había planteado la posibilidad de confeccionar el Atlas de la violencia desde la dimensión municipal con el propósito de mapear fielmente la dispersión del crimen y con ello detectar con precisión las zonas marrones, la realidad es que esto no puede ser posible en tanto son muy pocos los países que disponen esa información a ese nivel de detalle.

Muy por el contrario, la experiencia del equipo permite asegurar que por lo que se refiere a la sistematización de los datos de homicidios en la región se pueden concluir seis cosas: *a)* que la gran mayoría de los países no tienen, o al menos no es pública, la información actualizada del número de homicidios; *b)* que en algunos casos, como en Guatemala, estos datos sólo es posible conseguirlos a través de una solicitud formal; *c)* que no todos los países contabilizan con un criterio homogéneo, es decir, que mientras en unos el nivel de detalle entre delitos dolosos y culposos es muy preciso, en otros sólo se puede encontrar el total en números absolutos; *d)* que no todos los países tienen al día el total de habitantes de sus territorios lo que dificulta en cierta medida el cálculo de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes; *e)* que en países como Brasil,

Colombia o México existe una doble contabilidad en organismos oficiales y éstos no son coincidentes por la metodología que utilizan para levantar la estadística; y f) que a pesar de que es más plausible encontrar datos que referencien el número de homicidios a nivel local (ya sea estatal, provincial, departamental, etc.) la realidad es que aun así se evidencian muchas deficiencias en países de Centroamérica y el Caribe.¹¹

Por su parte, en cuanto a las variables independientes que se exploran para este estudio resulta por demás interesante que al igual que en el caso de los datos para homicidios la información no siempre está disponible con facilidad lo que deja de manifiesto las asimétricas condiciones que existen de Estado a Estado en la región tanto para procesar y sistematizar información demográfica y socioeconómica cuanto para financiar estas tareas y favorecer la transparencia.

De esta manera, por ejemplo, al buscar indicadores para variables como la debilidad institucional, la desigualdad o el capital social, el equipo de investigación ha tenido problemas para localizar, o bien para parametrizar información/datos relacionados con el perfil de los jefes policiacos o los cambios institucionales, por un lado, así como para encontrar información aparentemente muy sencilla como el acceso a la salud, la educación, el número y el tipo de empleos creados o estimar la brecha salarial.

Lo anterior, antes que una excusa o justificación *ex ante*, sirve para puntualizar la difícil tarea a la que se enfrentan quienes incluso desde hace tiempo han venido trabajando un problema como el de la inseguridad en una región que como la latinoamericana no cuenta con las mejores capacidades estatales para ofrecer fuentes primarias confiables, sobre todo en aquellos países en los que el Estado de Derecho es más bien débil o frágil como es el caso de América Central y el Caribe.

EN BUSCA DE LA RELACIÓN CAUSAL: UN PRIMER ACERCAMIENTO A LAS VARIABLES QUE PUEDEN EXPLICAR EL PROBLEMA

Debilidad institucional

Se entiende por debilidad institucional la incapacidad que tienen los Estados para financiar sus instituciones, cumplir sus funciones y con ello garantizar el Estado de Derecho (*rule of law*) comprometiendo hasta cierto punto la gobernabilidad y el control efectivo de sus territorios. De acuerdo con esto, en materia de seguridad se establece que la escasez de recursos, así como la inestabilidad institucional traducida en cambios constantes en el diseño de las mismas y en el perfil de quiénes están al frente de las fuerzas de seguridad son fallas estructurales que inciden en los niveles de inseguridad.

¹¹ Resulta por lo menos paradójico el hecho de que para informes como el que realiza UNODC los distintos gobiernos reporten el número de homicidios a nivel local cuando dicha información no suele estar disponible en acceso abierto, lo que permite pensar que esos datos sí existen pero los gobiernos los mantienen reservados sin explicación alguna. No obstante, cabe señalar que la propia UNODC manifiesta en su informe las dificultades que existen en varios países para recabar los datos, en cuyos casos otra fuente para obtenerlos es a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

a) *Presión fiscal.* De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la presión fiscal de los países latinoamericanos, incluyendo las contribuciones sociales, es muy baja lo que compromete mucho a los Estados de cara a cumplir eficientemente sus obligaciones. Esto en sí es una situación bastante grave pues indica que los Estados están descapitalizados, lo que en materia de seguridad supone que no se puede equipar adecuadamente a los cuerpos policíacos y que éstos no cuenten ni con el entrenamiento ni con las condiciones laborales y salariales que garanticen el sentimiento de pertenencia a una institución cuya función y utilidad social es importantísima para garantizar el Estado de Derecho.

Al comparar el promedio de recaudación fiscal medido en porcentaje del PIB entre los países de la OCDE y aquellos de América Latina se tiene que el diferencial se duplica. Es decir, que mientras en la región latinoamericana la presión fiscal en promedio es de poco más del 17% del PIB, entre los países más desarrollados este porcentaje se eleva a casi el 35%. Esta cifra es muy elocuente porque habla de que para cubrir necesidades, los Estados en América Latina han recurrido principalmente a la explotación y exportación de recursos naturales y materias primas cuyos precios están sujetos a las fluctuaciones de los mercados de bienes de consumo. Asimismo, indica que se trata de países cuyos niveles de tecnificación y cualificación son muy bajos, en los que además los derechos de propiedad no están plenamente garantizados y el acceso al crédito es muy costoso. En otras palabras, se trata de países en donde hay pocas garantías en el cumplimiento de la ley, no existen grandes incentivos para los creadores e innovadores, pero sobre todo prevalecen fuertes y bien aceitadas instituciones extractivas en los términos que plantean Acemoglu y Robinson (2012).

TABLA 2. PRESIÓN FISCAL EN AMÉRICA LATINA 2012 EN PORCENTAJE DEL PIB

País	Total de ingresos tributarios (incluyendo contribuciones sociales)	País	Total de ingresos tributarios (incluyendo contribuciones sociales)
Argentina	37.3	Honduras	16.2
Belice	ND	Jamaica	ND
Bolivia	22.8	México	10.1
Brasil	ND	Nicaragua	18.9
Chile	18.7	Panamá	18
Colombia	16.1	Paraguay	13.8
Costa Rica	22	Perú	17.5
Ecuador	20.1	Rep. Dom.	13.5
El Salvador	16	Surinam	ND
Guatemala	10.9	T. y Tobago	ND
Guyana	ND	Uruguay	26.2
Haití	12.9	Venezuela	13.5

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de CEPALSTAT, 2012.

Lo anterior convierte a América Latina en una prolija región para la desigualdad en la que cada quien tiene un acceso bien diferenciado a bienes y servicios, cuya calidad, en principio, estará determinada por la capacidad económica que se tenga para pagar éstos, ya sea la educación o la salud, o bien, la seguridad y la justicia. Esto hace de América Latina una región sumamente desigual, pero al mismo tiempo muy insolidaria en la medida en que incluso quienes perciben los mayores ingresos no pagan o eluden impuestos, o bien, tienen regímenes especiales de tributación contraviniendo lo que los propios preceptos constitucionales establecen en cuanto a la igualdad ante la ley.

b) Perfiles de los jefes policiacos. Cuando se habla de seguridad pública se plantea que es un área a cargo de civiles, sin embargo, la realidad demuestra que esto no necesariamente es así. Tras la escalada de violencia, y como parte de las políticas de populismo punitivo, en la actualidad es posible encontrar al frente de las policías a personal militar en activo o en retiro que no sólo imprime sino que implementa prácticas y estrategias propias de las Fuerzas Armadas a estos cuerpos de seguridad. En ese sentido, se plantea la posibilidad de que en aquellos países en donde existe mayor incidencia de actos delictivos violentos existe efectivamente mayor número de militares metidos en labores de seguridad pública. Un ejercicio preliminar al respecto con base en los cuerpos policiacos de México, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay (los dos primeros, países que en los últimos años han experimentado un fuerte ascenso en homicidios, y los últimos, países cuyos niveles de incidencia delictiva han sido sostenidamente bajos) corrobora, al menos de manera parcial esta hipótesis.

De acuerdo con lo anterior, se observa que en México un tercio de las entidades federativas (11 de 32) tienen al frente de sus cuerpos de seguridad pública a personal de origen militar. En Venezuela, al menos 11 de los 25 estados tienen a un militar al frente de las policías, mientras que en Chile, exceptuando a Carabineros, la totalidad de los jefes de la Policía de Investigación son civiles con formación policial de profesión. De la misma manera ocurre en los casos de Argentina, Uruguay y Paraguay en los que se observa una clara tendencia a mantener al frente de los cuerpos policiacos a personal de carrera en estas instituciones.

Esto si bien no marca una tendencia estadística que pueda estimarse como significativa, al menos sí da pautas para indagar si existe alguna correlación entre el número de jefes policiacos de origen militar y los niveles de inseguridad que existen en los lugares en los que éstos están destacados. Pero al mismo tiempo corrobora que en aquellos países en los que han transitado por experiencias autoritarias en el pasado reciente existe una afirmación por mantener lejos de las tareas de seguridad pública a los militares que en otro tiempo marcaron de manera negativa a los países del Cono Sur, principalmente.

Corrupción

Como ya se ha mencionado aquí, la corrupción es una dimensión clave para entender el problema de la inseguridad, ya que la capacidad corruptora del crimen organizado está en el centro de la cuestión en la medida en que saca ventaja de la debilidad de las

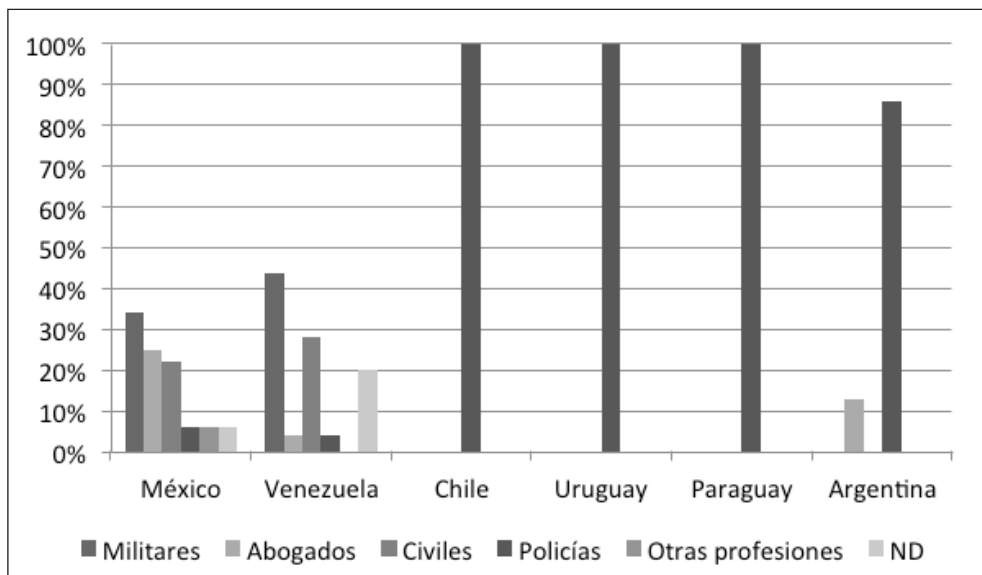


GRÁFICO 4. PERFIL DE LOS JEFES POLICIACOS EN MÉXICO, VENEZUELA Y CHILE (%)
Elaboración propia.

instituciones para cooptarlas y asegurar la protección tanto de sus actividades cuanto de sus miembros. Bajo ese argumento es posible plantear que a mayor corrupción tienden a aumentar los niveles de inseguridad, pensando en ésta ya no sólo en el número de homicidios cometidos (el indicador más común), sino en la cantidad de delitos perpetrados y que quedan impunes. Esto, sin lugar a dudas, influye en la confianza que los ciudadanos y las propias élites confieren a las instituciones de procuración e impartición de justicia, así como a los cuerpos de seguridad del Estado. Sobre esta última dimensión es impor-

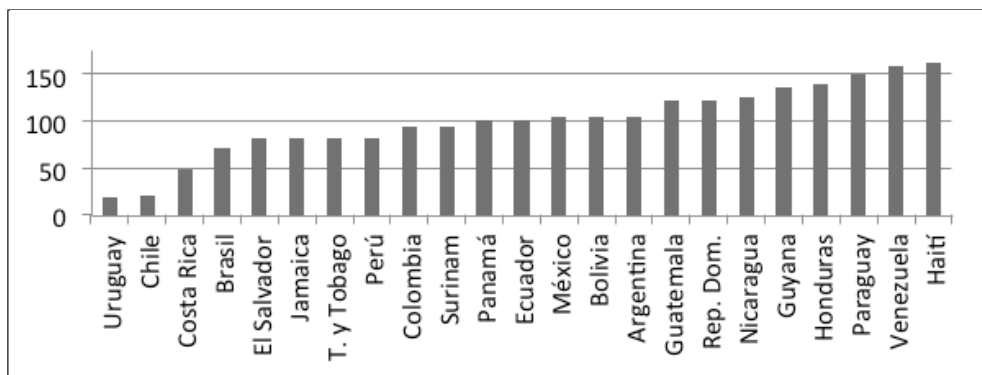


GRÁFICO 5. RANKING LATINOAMERICANO DE LA CORRUPCIÓN
SEGÚN TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, 2013

Elaboración propia con base en los datos de TI, 2013.

TABLA 3. PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ENTRE
LOS CIUDADANOS LATINOAMERICANOS

	Muy generalizada	Algo generalizada	Poco generalizada	Nada generalizada
Argentina	50.94	38.92	8.76	1.39
Belice	29.03	49.14	18.31	3.52
Bolivia	30.77	47.33	19.74	2.16
Brasil	31.7	42.15	17.8	8.36
Chile	24.9	50.14	20.94	4.02
Colombia	59.52	28.94	9.27	2.28
Costa Rica	40.87	43.6	13.28	2.25
Ecuador	30.66	46.64	20.25	2.46
El Salvador	35.55	34.25	22.66	7.53
Guatemala	39.12	36	18.57	6.32
Guyana	47.23	46.75	4.11	1.92
Haití	33.02	41.89	19.15	5.93
Honduras	51.99	31.79	12.48	3.73
Jamaica	42.04	44.91	10.8	2.26
México	44.97	42.19	11.26	1.59
Nicaragua	31.86	34.13	24.23	9.78
Panamá	50	38.28	9.54	2.18
Paraguay	43.27	37.61	14.94	4.18
Perú	52.77	28.3	16.4	2.53
Rep. Dom.	58.57	24.58	10.03	6.82
Surinam	5.97	32.2	35.15	26.68
T. y Tobago	49.14	45.16	4.8	0.89
Uruguay	20.23	50.65	24.61	4.52
Venezuela	41.39	46.8	9.14	2.67
Promedio AL	37.89	40.91	16.61	4.59

Elaboración propia con base en los datos de LAPOP, 2012. Pregunta exc7: Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos en el país está?

tante destacar que en aquellos países en donde se percibe más confianza los niveles de seguridad tienden a ser altos, lo que estaría indicando, además, que los ciudadanos perciben que existen las condiciones suficientes para acudir a ellas ya sea para denunciar un ilícito, o bien para acceder a la justicia sabiendo de antemano que existe un escaso margen de corrupción entre la policía, el ministerio público, el personal de juzgados y los jueces.

Al poner en lisa a los países de la región con relación al Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional (TI, 2013) es posible visualizar que a

excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica (tres de los países más seguros y en los que se confiere más confianza a las instituciones), el resto engrosan el grupo de países con tasas altas y muy altas de corrupción (Ver Gráfico 4). Pero además, cuando se presta atención a la percepción que los ciudadanos tienen sobre la corrupción en sus respectivos países resulta llamativo que en todos ellos, con excepción de Surinam, existe la sensación de que la corrupción cruza todos los ámbitos de la sociedad de manera muy acentuada, de tal suerte que en promedio cerca de cuatro de cada cinco latinoamericanos cree que la corrupción en sus países es muy o algo generalizada (LAPOP, 2012) (Ver Tabla 2).

Desprendido de lo anterior, cabe preguntarse: si los latinoamericanos perciben vivir en entornos altamente corruptos, ¿cuánta confianza tienen en sus instituciones? Tras revisar los datos disponibles del PELA y LAPOP y cruzar los mismos, las medias arrojan que en cuanto al Poder Judicial cuatro de cada 10 latinoamericanos confía poco o nada en él; por lo que respecta a la Policía, uno de cada dos concluye lo mismo; mientras que para las Fuerzas Armadas apenas uno de cada cuatro desconfía de ellas. Dicho lo anterior, esto conlleva a pensar que el Estado de Derecho en estos países es muy laxo, o lo que es lo mismo, que existe un sistemático desprecio a la ley porque se asume que mecanismos como la coima son más eficientes que la aplicación de la norma. Pero por otro lado, persiste una idea de que las Fuerzas Armadas aún son dignos de alguna o mucha confianza, y que éstos son, al final del camino, los guardianes del orden, el respeto y la moral de las instituciones. Lo anterior, no es una expresión baladí si se toma en cuenta que ante la espiral de violencia e inseguridad que padece la región, los gobiernos han encontrado en los ejércitos el último reducto viable para enfrentar un problema para el cual el crédito de las instituciones civiles se ha agotado.

Desigualdad

a) Acceso a la salud y a la educación. Si bien en promedio existe una cobertura de más de 90 por ciento en la matrícula a nivel primaria, no se puede decir lo mismo a nivel secundario en el que existe un descenso de cobertura que alcanza a alrededor del 73 por ciento de los jóvenes en edad de estudiar (CEPAL, 2012). Esto conlleva a plantearse al menos dos cosas: 1) que los esfuerzos por alcanzar altas tasas de escolarización han sido importantes pero no suficientes; y 2) que la cobertura no ha garantizado calidad en la educación.

Aunado a ello, cabe destacar el acceso bien diferenciado que tienen los latinoamericanos a la educación de mejor calidad (ya sea pública o privada) que en todo caso favorece a élites reducidas ya sean éstas económicas o intelectuales en todos los niveles. Esto quiere decir que las diferencias en el acceso y en el tipo de educación que reciben los estudiantes de esta región son el reflejo de las brechas de desigualdad que caracterizan al subcontinente, y por ende, son el caldo de cultivo para la escasa cualificación del capital humano que se está formando en las escuelas con sus respectivas consecuencias económicas y sociales hacia el futuro.

De la misma manera, en lo que respecta a la salud es importante notar que existen importantes franjas de la población que no tienen cobertura de salud, especialmente entre las personas que integran los deciles más pobres de la sociedad e incluso entre

sectores de quienes conforman la clase media en la región. La deficiente e inadecuada cobertura de la salud pone bajo relieve una más de las consecuencias de Estados mal financiados que no son capaces de cumplir con buena parte de sus obligaciones básicas.

b) Número y tipo de empleos creados. Una de las razones por las cuales América Latina es un continente desigual es porque no ha sido capaz de crear el número suficiente de empleos para absorber en el mercado laboral formal a las personas que año tras año buscan un empleo. Pero al mismo tiempo, otra de las razones que convierte a la región en un entorno muy inequitativo es la precarización de los salarios que en general se pagan a los trabajadores.

Esto tiene una buena explicación si se mira, por ejemplo, que dos de cada tres empleos creados en la región se concentran en el sector de los servicios que suelen ser escasamente productivos y consecuentemente muy mal remunerados (Grynspan, 2012). Aunado a ello, la expansión de los empleos informales (que no reportan impuestos y margina a un número bastante considerable de ciudadanos de los servicios sociales) son un problema muy serio en tanto sus ingresos no son muy superiores, o nada, al de aquellas personas enroladas en la economía formal, lo que en palabras de Grynspan (2012) puede generar “trampas de pobreza”.

Si a este panorama se suma la escasa productividad asociada al rezago tecnológico, la falta de innovación y la mala calidad educativa que prevalece en los países del área que de un tiempo a la fecha se han concentrado en competir por salarios bajos para atraer inversiones el resultado es que miles de personas, especialmente los jóvenes y las mujeres, vean incumplidas sus aspiraciones de desarrollo económico personal y los convierte en sectores muy vulnerables ante la delincuencia común y el crimen organizado que sí puede cubrir sus expectativas aspiracionales.

c) Brecha salarial por deciles. Este indicador permite mostrar cómo la distribución de los ingresos en la región es muy desigual en la medida en que hay una notoria concentración de la riqueza en el decil más rico con relación a todos los demás, y en especial respecto al 10 por ciento más pobre en cada uno de los países de los que se disponen datos.

De cara al fenómeno de la inseguridad y la violencia en la región este indicador es muy relevante pues refuerza la idea de que la inequitativa distribución de la riqueza es la culminación de una serie de asimetrías que experimenta la región en el acceso a la salud o a la educación, así como en lo que respecta al mediano promedio de escolaridad que delinea el modesto perfil económico de los países de la región que concentran su fuerza de trabajo en áreas y actividades poco cualificadas y mal remuneradas.

Esta última consecuencia ha conllevado a que miles de latinoamericanos estén marginados, postergados y precarizados situación que en entornos de debilidad institucional y con altos índices de corrupción se haya convertido en el caldo de cultivo propicio para la expansión y propagación de la delincuencia común y el crimen organizado. En otras palabras, esto quiere decir que la inequitativa distribución de los ingresos en la región es la fotografía final de la sumatoria de una serie de factores que terminan por trazar el perfil

altamente desigual que caracteriza a América Latina y cuya cara más negativa se ha traducido en la inseguridad. Con esto a su vez se trata de enfatizar que es la desigualdad y no la pobreza uno de los detonantes de la violencia que se vive en esta región del mundo.

TABLA #. BRECHA SALARIAL POR DECILES EN AMÉRICA LATINA (2012)

País/Deciles	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Argentina (Urbana)	1.2	2.6	3.4	4.6	5.6	7	8.8	11.4	15.8	39.8
Bolivia (2007)	0.4	1.6	2.8	3.6	5	6.8	8.6	11.4	17	42.8
Brasil (2009)	0.8	2	2.8	3.8	4.8	6.2	7.8	10.2	15.2	46.6
Chile (2009)	1.4	2.6	3.6	4.4	5.2	6.4	8	10.4	15	43
Colombia	0.8	1.8	2.8	3.6	4.6	6	7.8	10.6	15.8	46.2
Costa Rica	1.4	2.6	3.6	4.6	5.8	7	8.8	11.6	16.8	37.6
Ecuador	1.4	2.8	3.6	4.6	5.8	7	8.8	11.2	16	38.8
México	1.6	2.8	3.8	4.8	6	7.2	8.8	11.6	16	37.4
Panamá	1	2	3.2	4.4	5.8	7.2	9	11.8	16.4	39
Paraguay	1	2.2	3.2	4.4	5.6	6.8	8.6	11	15.4	41.8
Perú	1.6	2.8	4	5	6.4	7.8	9.6	12	16.2	34.6
Rep.Dom.	1	2	2.8	3.8	5	6.4	8.2	11	16.8	43.2
Uruguay	2.2	3.4	4.4	5.4	6.6	8	9.6	12	16.2	32.2
Venezuela	1.8	3.6	4.8	6	7.2	8.6	10.2	12.6	16.4	28.6

Fuente: CEPAL, 2012.

Bajo capital social

a) *Confianza interpersonal.* En América Latina, sólo uno de cada cinco ciudadanos dice confiar en los otros miembros de su comunidad (LAPOP, 2012). Esto quiere decir que en la región se experimenta un bajo capital social, pero también que entre países y dentro de ellos existen una serie de prejuicios que desacreditan al prójimo por su apariencia, sus rasgos físicos, o bien la pertenencia a diferentes grupos étnicos o socioeconómicos. Según estos criterios diferenciadores los responsables de la inseguridad serían los pobres, los pandilleros, los analfabetos o los inmigrantes porque al no poder revertir su situación encuentran en el crimen el espacio en el cual pueden hacerse ver en la sociedad, pero sobre todo cumplir algunas de sus aspiraciones económicas.

Aunque lo aquí escrito pueda resultar descabellado, la realidad es que muchas personas, de todos los estratos sociales están convencidas que la diferencia es peligrosa y que en ella radica buena parte de la inseguridad que viven los países de la región. Esta desconfianza interpersonal se traduce, por ejemplo, en el alto porcentaje de ciudadanos latinoamericanos (41%) que no dudarían tener un arma de fuego para su protección (LAPOP, 2012).

TABLA 4. PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PORTARÍAN UN ARMA DE FUEGO PARA SU PROTECCIÓN

País	Sí	No	País	Sí	No
Argentina	37.02	62.98	Honduras	39.39	60.61
Belice	48.53	51.57	Jamaica	53.65	46.35
Bolivia	50.43	49.57	México	47.58	52.42
Brasil	20.75	79.25	Nicaragua	51.01	48.99
Chile	24.44	75.56	Panamá	28.3	71.7
Colombia	27.16	72.84	Paraguay	52.15	47.85
Costa Rica	35.87	64.14	Perú	50.97	49.03
Ecuador	45.35	54.65	Rep. Dom.	60.5	39.5
El Salvador	36.83	63.17	Surinam		
Guatemala	30.41	69.59	T. y Tobago	51.28	48.72
Guyana	57.49	42.51	Uruguay	27.98	72.02
Haití	41.39	58.61	Venezuela	25	75
Promedio AL				41.51	58.49

Elaboración propia con base en los datos de LAPOP, 2012.

b) Promedio de escolaridad. Aunque para muchos esta dimensión es muy socorrida, o bien, un lugar común, la intención de utilizar el promedio de escolaridad como un indicador para explicar las causas de la inseguridad en la región se basa en la correlación que el mismo tiene con componentes como el perfil económico e incluso el índice de desarrollo humano (IDH) de los países. Este indicador permite entender, en términos generales, que América Latina es una región cuyo nivel educativo si bien se ha incrementado con relación a la década de 1960 (Barro y Lee, 2010), este progreso no ha sido suficiente como para superar la franja de los nueve años de escolaridad promedio.

Esto constituye en sí mismo un inconveniente porque permite establecer que la escasa escolaridad promedio de los países de la región (8 años) se asocia con el modesto perfil económico que poseen al tratarse de Estados cuyas fuentes de desarrollo se sustentan en la exportación de materias primas, la empleabilidad en el sector de los servicios y en la industria maquiladora; actividades que por su naturaleza no implican procesos complejos de tecnificación y que por lo mismo son retribuidos con salarios bajos a los que accede el grueso de la población económicamente activa.

Lo anterior permite plantear que el mediano y bajo promedio de escolaridad que prima en la región es un elemento a tener en cuenta de cara a comprender el fenómeno de la inseguridad habida cuenta de que la población económicamente activa se desempeña en trabajos escasamente cualificados, o bien en la economía informal, lo que conlleva a que estos países, en general, concentren la riqueza en sectores muy reducidos de la población que han tenido oportunidad y acceso a estudios mucho más avanzados que el promedio, por un lado, y a su vez sean escasamente productivos y competitivos, por el otro.

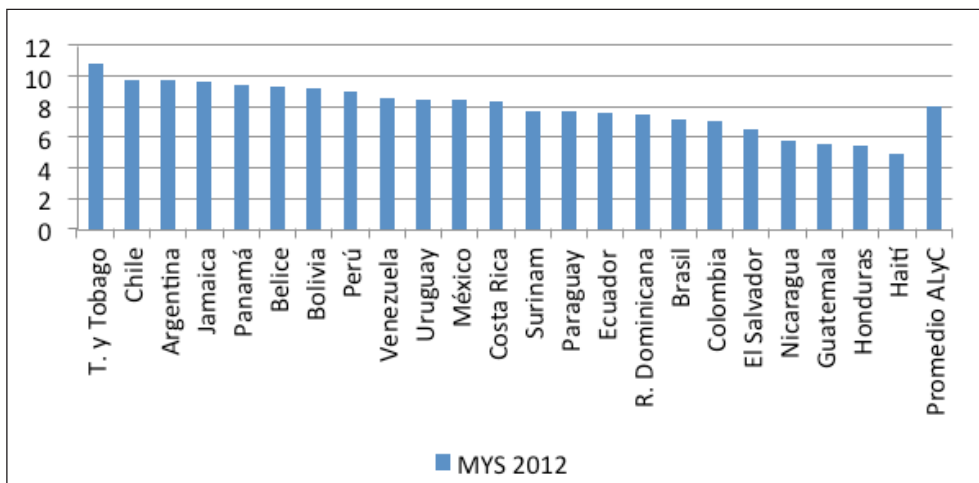


GRÁFICO 6. PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN AMÉRICA LATINA (2010)
 Elaboración propia con base en los datos del *Informe sobre Desarrollo Humano 2014* del PNUD.

El hecho de que el promedio de la población posea estudios de nivel secundario incide negativamente en el estado de seguridad de América Latina en tanto los empleos que se crean en la región requieren, por lo general, poca cualificación y la capacidad de absorción del mercado laboral no tiene cabida para amplias franjas de la población que de esta manera engrosan las filas de la economía informal manteniendo en todos los casos ingresos muy dispares frente a los grupos cuya formación ha sido más sofisticada, y en términos generales, concentran de manera muy desproporcional la riqueza. Esto se relaciona muy bien, a final de cuentas, con las brechas salariales ya expuestas.

Al echar un vistazo a este indicador en perspectiva comparada es posible apreciar que existen contrastes entre países con relación al promedio de escolaridad ponderado y las dimensiones de violencia e inseguridad que priman hacia su interior. Así, por ejemplo, llama la atención a primera vista que países como Jamaica o Trinidad y Tobago se ubiquen entre los Estados cuyo promedio de escolaridad es más elevado en la región, y por su parte se trate de países que se pueden clasificar como muy violentos, o bien que un país tan violento como Venezuela esté ligeramente encima de Uruguay y Costa Rica que son dos de los países más seguros de la región.¹² Más allá de eso, en general, el Gráfico 6 muestra una relativa concordancia entre inseguridad y escolaridad en la medida en que se puede observar que los niveles de violencia se relacionan razonablemente bien con los años que en promedio los habitantes pasan en la escuela. De esta manera, el hecho que países como los Centroamericanos se ubiquen en el furgón de cola de la escolaridad

¹² Cabe matizar que con relación a estos países las reformas educativas de la *Commonwealth* tras 1990 han dado un fuerte impulso a la permanencia de los estudiantes en las escuelas, lo que se ha traducido, efectivamente, en una mayor estancia de los jamaquinos y trinitarios en los centros educativos, pero no ha supuesto que continúen sus estudios más allá de la educación básica.

refleja muy bien su correlación con respecto a la inseguridad y la violencia que es particularmente fuerte en esta subregión.

COMENTARIOS FINALES

Tras este análisis, y a reserva de seguir ahondando con otras variables como las fallas en el sistema de justicia y las deficiencias en materia de cooperación entre Estados, así como en otros indicadores que conlleven, a su vez, a un análisis estadístico más preciso que permita testear comparativamente las variables independientes a fin de hallar evidencia empírica más precisa que arroje luces más claras sobre el problema de la inseguridad en la región, el presente ejercicio ofrece pautas, que además de facilitar la comprensión y la dimensión del fenómeno, permite vislumbrar cómo la suma de variables e indicadores se entretujan entre sí y brindan buenas sensaciones de cara a establecer que son las instituciones (vistas desde su funcionamiento y su capacidad para incluir/constreñir las conductas de los actores de las mismas) y no la cultura la clave para entender el problema de la violencia y la inseguridad que padece América Latina en general.

Con base en esto, se pueden establecer, de momento, dos tipos de comentarios finales: *a)* de diagnóstico; y *b)* de relación. En cuanto al diagnóstico, el cúmulo de la literatura especializada insiste en que América Latina es la región más violenta del mundo; que existe un desmesurado acceso a las armas de fuego, principalmente en los países que integran los “corredores naturales” del tráfico de drogas lo que ha conllevado a una mayor letalidad en ellos; que el crimen organizado ha diversificado de manera notoria sus actividades tanto ilícitas cuanto lícitas; que son la corrupción y la desigualdad, y no la pobreza, dos piezas claves para entender el fenómeno en la región; y que las instituciones del Estado son muy débiles y hay mucho espacio para la impunidad, y con ello, para la ineffectividad del Estado del Derecho.

Por lo que respecta a los comentarios de relación, cabe destacar que la mala recaudación fiscal que caracteriza a los Estados latinoamericanos es apenas la punta de la hebra de un problema que se despliega en múltiples direcciones. De esta manera, la insuficiente financiación de los Estados ha redundado, la mala formación de los policías, su insuficiente equipo y sus precarias condiciones laborales, que convierten a los elementos policiacos en blancos fáciles para la corrupción.

Al mismo tiempo, la militarización de las policías como resultado de las políticas de populismo punitivo, además de estar lejos de ofrecer los resultados que los tomadores de decisiones esperaban no ha mitigado el fenómeno de la corrupción en entornos en los que existe una percepción bastante generalizada de que el Estado de Derecho no se cumple y se pueden jugar las cartas por fuera de la ley. Cuestión que ha redundado en la escasa confianza que los ciudadanos y las propias élites confieren a las instituciones, que en principio, tienen que hacer frente y ofrecer respuestas a los desafíos de quienes infringen las normas socialmente aceptables.

De la misma manera, aunado a la desconfianza a las instituciones, la evidencia empírica nos arroja que la región experimenta una creciente desconfianza interpersonal, que

a su vez a establecido las bases para sostener, infundadamente un miedo a la otredad, especialmente hacia los pobres, los pandilleros, los inmigrantes, etc., que en su condición de postergados han tenido que cargar con el estigma que los asocia automáticamente como los portadores de la violencia cuando bien por el contrario son las inequidades en el acceso a bienes y servicios, como la educación, la salud, el mercado de trabajo e incluso la justicia las que han creado condiciones bastante adversas para que las personas, en términos generales, permanezcan más años en la escuela, cuenten con buenos servicios de salud, o bien, puedan enrolarse con mayor facilidad a un mercado de trabajo que satisfaga sus perspectivas aspiracionales. Cuestión, esta última, que está lejos de cumplirse en tanto los Estados latinoamericanos no sólo no crean los empleos suficientes para absorber adecuadamente a la fuerza laboral que año con año busca un empleo, sino que difícilmente pueden crear plazas mejor remuneradas en tanto en las últimas dos décadas los gobiernos de la región se han empeñado en competir en los mercados internacionales por ofrecer los salarios más bajos posibles para atraer la inversión convirtiendo de esta manera a América Latina no sólo en la región más desigual del mundo, sino en una región marcada por la precarización en todos los sentidos.

Es precisamente en estas condiciones que el crimen, principalmente el organizado, ha encontrado las condiciones más propicias para ocupar los vacíos de Estado, expandirse y cumplir las expectativas que amplios sectores, sobre todo, los juveniles ven difíciles de satisfacer en el marco de las instituciones formales. En suma, de lo que no cabe duda es que los niveles de inseguridad en la región no son normales, por más que millones de personas hayan ido naturalizando, o bien, normalizando la violencia en su vida cotidiana. Y por otro lado, resulta cuando menos paradójico que muchos gobiernos con una matriz democrática, empleen recursos autoritarios para contener un problema que tiene que ver más con los déficits de la democracia prescriptiva (O'Donnell, 2007) que con la criminalización de la pobreza. En efecto, con la democracia por sí sola ni se come ni se cura ni se educa, pero es bien cierto que sin ella no existirían reglas que den certidumbre para hacer las cosas de manera distinta.

BIBLIOGRAFÍA

- Acemoglu, Daron y James Robinson. (2012) *¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza*. México, Crítica.
- Acevedo, Carlos. (2008). “Los costos de la violencia en El Salvador”. *América Latina Hoy*, núm. 50, pp. 71-88.
- Auyero, Javier, Agustín Burbano de Lara y Flavia Bellomi. (2012). “Violence and the State at the Urban Margins”. En *Seminario de investigación del Instituto de Iberoamérica*. Salamanca, Universidad de Salamanca. Disponible en: http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/auyeroetal_paper_seminarioInstituto.pdf

- Barro, Robert J. y Lee Jong Wha (2010) "A New Data Set of Educational Attainment in the World 1950-2010". National Bureau of Economic Research. Working Paper. Disponible en: <http://www.nber.org/papers/w15902.pdf>. Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2014, 10:55.
- Bergman, Marcelo (2009) *Tax evasion and the rule of law in Latin America*. Pennsylvania: Penn State University Press.
- Buchanan, Cornelia, Liz De Angelo, Ruidan Ma y Chris Taylor (2012) "Mano Dura en las Américas: ¿quién apoya a las políticas de mano dura?", en *Perspectivas desde el Barómetro de las Américas: 2012*, núm. 80, LAPOP, Vanderbilt University.
- Briceño León, Roberto (2008) "Violencia homicida en América Latina". *América Latina Hoy*, núm. 50, pp. 103-116.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2012). *Bases de datos y publicaciones estadísticas*. Disponible en: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
- Dammert, L. y F. Salazar. (2009) *¿Duros con el delito?: populismo e inseguridad en América Latina*. Santiago, Flacso-Chile.
- El Universal (2008). "Desafilia FMF a Mapaches de 2da. y 3a. división". 21 octubre 2008. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/548993.html>.
- Espinoza, Ana Yancy y Javier Meléndez. (2011) "Las políticas de seguridad en el segundo gobierno de la 'era progresista' en Uruguay". En Hans Mathieu y Catalina Niño Guarnizo (Eds.) *Seguridad regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2011*. Bogotá: Fundación Friedrich Ebert-Programa de Cooperación en Seguridad Regional, pp. 68-75.
- Frühling, Hugo (2012) *La eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Goldstein, Daniel, Gloria Achá, Eric Hinojosa y Theo Roncken. (2007). "La mano dura and the violence of civil society in Bolivia". *Social Analysis*, núm. 51, pp. 43-63.
- Goodwin, Jeff (1999) *No Other Way Out: States and Revolutionary Movements 1945-1991*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Latin American Public Opinion Project (LAPOP). (2012). *The Americas Barometer*. Vanderbilt University. Disponible en: www.LapopSurveys.org
- Latinobarómetro (2013) *Informe 2013*. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Disponible en: http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LB_2013.pdf
- Linares, Sebastián (2004) "¿Qué es y cómo se mide la independencia judicial?" *Política y Gobierno*, II (1): 73-135.

- Malone, Mary Fran T. (2006) “Does Dirty Harry Have the Answer? Citizen Support for the Rule of Law in Central America”. *Public Integrity*, 13(1), pp. 59-80.
- Martín Álvarez, Alberto y Verónica de la Torre Oropeza. (2008) “La interacción transnacional de la sociedad civil centroamericana frente a la violencia juvenil. *América Latina Hoy*, núm. 50, pp. 89-102.
- Mathieu, Hans y Catalina Niño Guarnizo (eds.). (2011). “Tendencias y perspectivas de la seguridad regional en América Latina y el Caribe, en *Anuario 2011 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe*. Bogotá, Friedrich Ebert Stiftung.
- Mejía, Sonia. (2011). “Las debilidades de las políticas de seguridad en América Latina en un contexto de fortaleza económica y política”, en *Documento de Opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, núm. 11/2011. Disponible en www.ieee.es
- Molzahn, Cory, Octavio Rodríguez-Ferreira y David A. Shirk. (2013). *Drug violence in Mexico. Data and analysis trough 2012*. San Diego, University of San Diego.
- Moriconi Bezerra, Marcelo. (2013). *Ser violento. Los orígenes de la inseguridad y la víctima-cómplice*. Buenos Aires, Capital Intelectual.
- Murillo, Victoria y Levitsky. (2012) “Institutional Change and State Capacity in Weak Institutional Enviroments: Reflections on the Latin American Experience”. *State Building Workshop*. Sao Paulo.
- Niño Guarnizo, Catalina (2011) “La seguridad de América Latina: respuestas fragmentadas a desafíos transnacionales”. En Hans Mathieu y Catalina Niño Guarnizo (eds.) *Anuario 2011 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung, pp. XVII-XXXI.
- O'Donnell, Guillermo. (2007). *Disonancias. Críticas democráticas a la democracia*. Buenos Aires, Prometeo.
- _____. (1993) “On the State, Democratization and some Conceptual Problems: a Latin American View with Glances at some Postcommunist Countries”, *World Development*, 21, pp. 1355-1369.
- Pásara, Luis (ed.). (2007). *Los actores de la justicia latinoamericana*. Salamanca, Universidad de Salamanca.
- _____. (comp.). (2004). *En busca de una justicia distinta. Experiencias de reforma en América Latina*. México, UNAM.
- Proyecto de Élités Parlamentarias Latinoamericanas (PELA). Salamanca, Universidad de Salamanca. Disponible en: <http://americo.usal.es/oir/elites/>
- Pérez-Liñán, Aníbal (2010) “El método comparativo y el análisis de configuraciones causales”. *Revista Latinoamericana de Política Comparada*, núm. 3 (enero), pp. 125-148, Quito, Celaep.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2014). *Informe sobre desarrollo humano 2014*. Nueva York, PNUD. Disponible en: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-es.pdf>. Fecha de consulta: 20 septiembre 2014, 7:37.
- Smulovitz, Catalina (2003) "Citizen Insecurity and Fear: Public and Private Responses in Argentina". En Hugo Frühling, Joseph S. Tulchin y Heather Golding (eds.). *Crime and Violence in Latin America: Citizen Security, Democracy and the State*. Washington, D.C., Woodrow Wilson Center, pp. 125-154.
- Sin Embargo* (2014). "Templarios envían hierro a China, y les mandan químicos: WSI; cárteles compiten ya con empresas legítimas, dice". 15 de enero de 2014. Disponible en: <http://www.sinembargo.mx/15-01-2014/873559>.
- _____. (2012). "'Coincidencias' muestran que criminales que explotan carbón en Coahuila tienen apoyo federal y local". 4 noviembre 2012. Disponible en: <http://www.sinembargo.mx/04-11-2012/419566>.
- Solís Delgadillo, Juan Mario. (2008). *La influencia de las Facultades de Derecho en la reproducción de prácticas viciadas en el sistema judicial mexicano. El caso de San Luis Potosí*. Tesis de Máster en Estudios Latinoamericanos. Salamanca, Instituto de Iberoamérica-Universidad de Salamanca.
- Transparency International. (2013). *Corruption Perceptions Index 2013*. Berlín, TI.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). *Global Study on Homicide. Trends, Contexts, Data*. Viena, ONU.

JUAN MARIO SOLÍS DELGADILLO. Profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Ha realizado estancias de investigación en la Università degli Studi Roma Tre (Italia) y en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (Argentina). Es miembro del consejo del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y del Consejo de Redacción de la revista *América Latina Hoy*. Ha publicado artículos de investigación en revistas especializadas de México, España, Argentina, Venezuela, Brasil, Ecuador y Estados Unidos, así como varios capítulos en libros. Ha sido profesor invitado en El Colegio de San Luis, A.C. en la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas y en la Universidad Columbia del Paraguay en la Maestría en Política Global. En septiembre de 2013 recibió el Premio "Guillermo O'Donnell" a la mejor tesis doctoral (2012-2013) que concede la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip) por su investigación "Memoria democrática y olvido político: la gestión gubernamental de las políticas de memoria en Chile y Argentina". Correo electrónico: juanmariosolis@gmail.com

VICENTE TORRE DELGADILLO. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Maestro en Defensa Fiscal por la Universidad de Guanajuato, Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I desde 2009. Líder del Cuerpo Académico Reforma del Estado y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, Coordinador del Centro Académico de Justicia Alternativa de la UASLP.

